

Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco.

**Visto:**

La comparecencia de don Omar Morales Márquez, profesor de Historia y Geografía, en su calidad de Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación y en su representación, quien interpone reclamo de ilegalidad de conformidad a los artículos 28 y siguientes de la Ley N° 20.285, en contra del Consejo para la Transparencia, por la decisión del amparo de 12 de noviembre de 2024 , Rol C 7846-24 y que fuera comunicada a ese servicio el 18 de noviembre de 2024, por la que se acogió dicho amparo presentado por quien se identifica como Mauricio León Cáceres, desde la casilla electrónica melcomauricio@gmail.com, sin acreditar su identidad y ordenó la entrega de la información pedida.

Pide se declare la ilegalidad de la decisión y se la deje sin efecto, por cuanto la información ordenada entregar no obra en poder del órgano que representa y no se encuentra en los términos solicitados en ninguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10° de Ley de Transparencia. Dicho de otro modo, no se registra la información solicitada.

Entiende que, al no registrarse la información solicitada, atendido lo señalado precedentemente, se está ante información inexistente, de acuerdo con los estándares definidos en los artículos 4° y 10° de la Ley de Transparencia, pues no se trata de información que consta en un acto administrativo o resolución. Es decir, no se está en los casos del inciso segundo del artículo 8° de la Constitución ni de los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**Primero:** Expone el recurrente que Mauricio León Cáceres, desde la casilla electrónica melcomauricio@gmail.com, sin acreditar su identidad, pide al servicio, hacer entrega de *la información estadística de todos los matrimonios celebrados ante entidades religiosas e inscritos en el Registro Civil en virtud del artículo 20 de la Ley 19.947, desde el año 2004 hasta el año 2023 inclusive, incluyendo el número de matrimonios inscritos por cada*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JMBSXTXDNMN

*año a nivel nacional y regional, con indicación de las entidades religiosas ante las cuales se celebraron dichos matrimonios.*

Expone que con fecha 11 de julio de 2024, estando dentro de plazo, mediante Carta STSI N°1929, el Servicio procedió a dar respuesta a la consulta ingresada al Subdepartamento de Transparencia y Sistema de Integridad de esta Institución, indicando que, en virtud del ordenamiento jurídico aplicable y jurisprudencia judicial citada, lo solicitado no se comprende dentro de los deberes de transparencia que la Constitución y la Ley N°20.285 establecen, al siguiente tenor:

*“El Servicio de Registro Civil e Identificación, elabora información en base a las actuaciones que le son propias y que se encuentran registradas en una fecha y hora determinada, sin embargo, estas actuaciones son esencialmente variables pues en un lapsus de segundos pueden ser objeto de rectificaciones, cancelaciones e incluso eliminaciones, no constituyendo, en consecuencia, una estadística oficial del Estado de Chile, materia que es de competencia del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).*

*Por tanto, solo corresponde a nuestro Servicio registrar, mantener y entregar datos de carácter estadístico al órgano técnico especializado, INE, quien tiene a su cargo la formación de las estadísticas oficiales, como ente técnico e independiente, el que cuenta con un conjunto de atribuciones y facultades de las que carece este Servicio.*

No obstante lo anterior, y considerando la información “disponible en este Servicio”, extraída del sistema de datos internos que es administrado por la Subdirección de Estudios y Desarrollo, con fecha de corte de 26 de junio 2024, se procede a entregar de la información solicitada, la que está anexada a dicha carta respuesta.

Razona que en el caso en particular, el artículo 20 de la actual Ley de Matrimonio Civil, señala las funciones del Servicio de Registro Civil en la materia, sin que dicha norma establezca el deber de efectuar trabajos estadísticos respecto de dicha información.

Sostiene que esta normativa se complementa con el Decreto N°673, de 2004, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba normas reglamentarias sobre matrimonio civil y registro de mediadores, el



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JMBSXTXDNMN

cual, en su párrafo quinto y sexto, indica las funciones de este Servicio en la materia.

Considera entonces, que resulta manifiesto que la normativa aplicable no ordena a ese Servicio registrar, en forma alguna, lo solicitado por el ciudadano reclamante, estándose en situación de inexistencia, conforme a lo indicado en las normas pertinentes de la Ley de Transparencia, pues no hay deber alguno de registrar *“los matrimonios celebrados ante entidades religiosas en virtud del artículo 20 de la Ley 19.947, cuya inscripción haya sido rechazada por el Registro Civil, desde el año 2004 hasta el año 2023 inclusive, indicando el número de rechazos por cada año a nivel nacional y regional, y una referencia del motivo de rechazo”*.

Complementando su reclamación, expone que lo solicitado no obra en poder del órgano que representa y no se encuentra en los términos solicitados en ninguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10° de Ley de Transparencia. Dicho de otro modo; no se registra la información solicitada.

Y al no registrarse la información solicitada, atendido lo señalado precedentemente, cabe señalar que se está ante información inexistente, de acuerdo con los estándares definidos en los artículos 4° y 10° de la Ley de Transparencia.

Argumenta que concordando con lo que expuso, no se trata de información que consta en un acto administrativo o resolución. Es decir, no se está en los casos del inciso segundo del artículo 8° de la Constitución ni de los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia.

En atención a todo ello, estima que en definitiva, la Ley de Transparencia no es la vía idónea para recabar la información solicitada puesto que, el legislador, ha establecido un procedimiento especial para su acceso y a éste debe estarse.

**Segundo:** Informó don David Ibaceta Medina, por el Consejo para la Transparencia, solicitando sea el reclamo rechazado en todas sus partes.

En cuanto al fondo del reclamo, expone que el Servicio de Registro Civil refiere, en síntesis, que lo solicitado está asociado a información cuyo tratamiento está regulado por leyes especiales, razón por la cual, la Ley de



Transparencia no es la vía establecida por el legislador para acceder a la información pretendida en este proceso.

Arguye que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental incorporado en el ordenamiento jurídico ya sea en forma implícita en el Art. 19 N° 12 de la Constitución, o bien de manera explícita en los tratados internacionales, que se encuentran vigentes y ratificados por Chile, formando parte de los derechos fundamentales en virtud de lo dispuesto en el Art. 5° inciso 2° de la Constitución.

Cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, promulgado por el decreto supremo N° 778, de 1976, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que junto con establecer que cada uno de los Estados Partes se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en aquél, dispone en su artículo 19 N° 2 que, “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”

Agrega que en semejantes términos, se integra al ordenamiento jurídico chileno, el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos o CADH), aprobado por el decreto supremo N° 873 de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que reconoce el acceso a la información como un derecho implícito en la Libertad de pensamiento y de expresión

En síntesis considera que al consagrar la Carta Fundamental en su Art. 8° una directriz de publicidad, junto con el derecho fundamental de acceso a la información dispuesto en el Art. 19 N° 12 de la Carta Fundamental y en el Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se establece una base a partir de la cual el legislador debe desarrollarlos, lo que efectivamente ocurre con la Ley N° 20.285, lo que permite acceder a la información objeto de estos autos.

Reitera que lo ordenado entregar en este caso consiste en “información estadística de todos los matrimonios celebrados ante entidades religiosas e inscritos en el Registro Civil en virtud del artículo 20 de la Ley



19.947, desde el año 2004 hasta el año 2023 inclusive, incluyendo el número de matrimonios inscritos por cada año a nivel nacional y regional, con indicación de las entidades religiosas ante las cuales se celebraron dichos matrimonios”.

Al respecto, precisa que el inciso 2° del artículo 3 de la Ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, establece que corresponderá a dicho Servicio *"llevar los registros y efectuar las actuaciones que la ley encomiende"*, luego, los numerales 1, 2 y 9, del artículo 4° del mismo cuerpo legal prescribe que son funciones del Servicio formar y mantener actualizados los registros que indica, entre ellos, el “De Nacimiento, Matrimonio y Defunción”, como también “2. *Inscribir en el registro correspondiente los nacimientos, matrimonios y defunciones; y dejar constancia en dichas inscripciones de los hechos y actos jurídicos que las modifiquen, complementen o cancelen;*”, y por último “9. *Informar a los organismos que la ley señala, los datos estadísticos relacionados con la información que lleva este Servicio con sujeción a la ley y que no sean de competencia propia de otros servicios*”.

Por su parte, y a modo de contexto, el inciso 1° del artículo 20 de la ley N° 19.947, que establece la nueva Ley de Matrimonio Civil, dispone que “*Los matrimonios celebrados ante entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica de derecho público producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, siempre que cumplan con los requisitos contemplados en la ley, en especial lo prescrito en este Capítulo, desde su inscripción ante un Oficial del Registro Civil*”.

Luego, el inciso 3° de la citada norma, establece que “*El Oficial del Registro Civil verificará el cumplimiento de los requisitos legales y dará a conocer a los requirentes de la inscripción los derechos y deberes que corresponden a los cónyuges de acuerdo a esta ley. Los comparecientes deberán ratificar el consentimiento prestado ante el ministro de culto de su confesión. De todo lo anterior quedará constancia en la inscripción respectiva, que también será suscrita por ambos contrayentes*”. Asimismo, el inciso 4° del mismo artículo, indica que “*Sólo podrá denegarse la inscripción si resulta evidente que el matrimonio no cumple con alguno de*



*los requisitos exigidos por la ley. De la negativa se podrá reclamar ante la respectiva Corte de Apelaciones”.*

En el mismo sentido, el artículo 23 del Decreto N° 673, de 2004, del Ministerio de Justicia, que Aprueba Normas Reglamentarias sobre Matrimonio Civil y Registro de Mediadores, establece que *“Las entidades religiosas autorizadas para celebrar matrimonios en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley N° 19.947, son aquellas que gozan de personalidad jurídica de derecho público de acuerdo a la ley 19.638”*. Luego, el artículo 24 del mismo Decreto, dispone que *“El Servicio de Registro Civil e Identificación contará en su base de datos con una nómina de las entidades religiosas con personalidad jurídica de derecho público a que se refiere el artículo precedente. Esta nómina se formará y mantendrá actualizada mediante la información que periódicamente entregará el Ministerio de Justicia al Servicio de Registro Civil e Identificación”*. Finalmente, el artículo 25 indica que *“Podrán celebrar matrimonios en conformidad al artículo 20 de la ley N° 19.947, los ministros de culto, pertenecientes a una entidad religiosa que goce con personalidad jurídica de derecho público, que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos (...)”*.

En este sentido, respecto de los datos consultados, asume que se trata de información que, efectivamente, obra en poder del Servicio conforme a sus funciones legales. En efecto, constituye una obligación legal por parte del órgano, verificar que las entidades religiosas que hayan celebrado matrimonios, se encuentren autorizadas para ello, que gocen de personalidad jurídica de derecho público, y que cumplan los requisitos que establece la ley. Asimismo, el Servicio cuenta con una base de datos con información sobre las respectivas entidades religiosas autorizadas, entregada por el Ministerio de Justicia.

Luego, el artículo 3° letra e), del Reglamento de la Ley de Transparencia, define el término “documento”, como: *“Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo, diagrama, documento gráfico, fotografía, microforma, grabación, video, dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales y, en general, todo soporte material que contenga*



*información, cualquiera sea su forma física o características, así como las copias de aquellos”.*

A continuación, el Art. 5° de la LT establece que: *“En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.*

*Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.*

Agrega que *"el acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales".*

A su turno, el artículo 11 letra c), de la LT, que establece el Principio de Apertura o Transparencia *“conforme al cual, toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.*

Señala que el espíritu y la voluntad del legislador, plasmados en la Ley N° 20.285, consiste en que el ciudadano pueda acceder a toda información que exista y obre en poder de los órganos de la Administración, sea cual sea el formato material o soporte en que esta se encuentre, sin importar su origen, clasificación o procesamiento, de lo que se sigue que es la misma ley la que permite el acceso a información incluso cuando involucre el procesamiento, sistematización o consolidación de antecedentes todos los cuales ya obran en su poder, lo que se ve reforzado por lo dispuesto en las letras a) y d) del Art. 11 de la LT, que consagran los Principios de Relevancia, conforme al cual se presume relevante toda información que posean los órganos de la Administración del Estado,



cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento; y de máxima divulgación, de acuerdo al cual los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales, de lo que se sigue que no hay infracción legal alguna en la decisión contenida en amparo C7846-24.

Razona finalmente, que se debe desestimar la alegación del servicio en orden a que no se trataría de una solicitud en el marco de la Ley de Transparencia, sino del ejercicio del derecho de petición, y que la información no existiría y que no tendría la obligación de sistematizar lo pedido, máxime si en sede administrativa alegó las causales del artículo 21 N° 1 letra b) y 2 de la LT.

Al respecto, afirma que el órgano recurrente está equivocado, pues si la información no consta en un acto administrativo o en un solo soporte en forma consolidada, no puede ser excusa suficiente para evadir la entrega de información pública. En este sentido, bastaría que la autoridad arguyera que la información que se le pide no se encuentra sistematizada en la forma pedida para sustraerse del cumplimiento de la normativa que le obliga a facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley como lo prescribe el artículo 4° de la LT.

**Tercero:** Que, el tercero interesado don Mauricio León Cáceres habiendo sido notificado del reclamo interpuesto, no presentó descargos u observaciones respecto de estos antecedentes.

**Cuarto:** Que para resolver la procedencia de la alegación central formulada por la recurrente, es necesario atender a lo dispuesto por el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política, que señala que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen, previniendo que solo una ley de quorum calificado podrá establecer la reserva o secreto de cualquiera de ellos.

En el mismo sentido, el artículo quinto de la ley N° 20.285, prescribe que los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son





públicos, añadiendo que también tienen ese carácter los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, agregando, en su inciso 2º, que igualmente es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración.

Así, según sintetiza el profesor Miguel Angel Fernández Gonzalez, “*...lo dispuesto en las dos disposiciones referidas, una constitucional y otra meramente legal, el objeto sobre el cual recae el principio de publicidad y que, por ende, excepcionalmente puede ser objeto de secreto o reserva, está constituido, primero, por los actos de los órganos estatales; segundo, por las resoluciones que emanan de ellos; tercero, por los fundamentos que han servido de base ineludible para adoptar la decisión; cuarto, por los procedimientos que se han seguido para elaborar o producir aquellos actos o resoluciones; y, en el caso de los órganos de la Administración del Estado, también son públicos los documentos que sirven de sustento o complemento directo y esencial a sus actos y resoluciones; la información elaborada con presupuesto público; y, en fin, cualquier otra información que obre en su poder.*” (Artículo “Objeto del Principio de Publicidad, a propósito del Artículo 5º de la Ley N° 20.285” en Revista de Derecho Público. Vol. 71, pág. 47)

**Quinto:** Que como consecuencia de los principios recién señalados, la citada ley de Transparencia, en su artículo 21, solo autoriza la denegación parcial o total del acceso a la información, cuando se acredite concurrir alguna de las causales que allí se establecen.

En el presente reclamo, el Servicio de Registro Civil alega, conforme lo señala en su respuesta al requirente: “*el informe que requiere no se encuentra en los términos solicitados en ningún soporte de aquellos que establece el artículo 10º de la Ley de Transparencia; en efecto, lo que usted solicita, es que se elabore una base de datos con los parámetros y/o elementos que usted establece, cuestión que, en definitiva, no constituye ejercicio del derecho de acceso a la información pública*”.

Detalla que para responder, se debe realizar por dicho órgano, un proceso estadístico, que conforme a la normativa que la rige, no está dentro de sus obligaciones. Además, estima, que lo pedido excede los márgenes



fijados por la Ley de transparencia, por lo que los antecedentes del requerimiento, en la forma pretendida, no está en su poder ni corresponde tampoco a una resolución o a un acto administrativo, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, ni los procedimientos que se utilicen para su dictación.

**Sexto:** Que la petición requerida y ordenada cumplir por el Consejo para la transparencia, consiste en la entrega de la información estadística de todos los matrimonios celebrados ante entidades religiosas e inscritos en el Registro Civil en virtud del artículo 20 de la Ley 19.947, desde el año 2004 hasta el año 2023 inclusive, incluyendo el número de matrimonios inscritos por cada año a nivel nacional y regional, con indicación de las entidades religiosas ante las cuales se celebraron dichos matrimonios.

**Séptimo:** Que, respecto de las funciones que tiene el órgano público recurrido, conforme las normas jurídicas que lo rigen, está la de registrar cada uno de los datos requeridos por el solicitante, pues conforme al artículo 20 de la ley 19.947, tiene la obligación de registro de los matrimonios celebrados ante entidades religiosas que se inscriban en el Registro Civil; y el tenor del artículo 23 del Decreto N° 673, de 2004, del Ministerio de Justicia, que aprueba Normas Reglamentarias sobre Matrimonio Civil y Registro de Mediadores, se establece que las entidades religiosas autorizadas para celebrar matrimonios en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley N° 19.947, son aquellas que gozan de personalidad jurídica de derecho público de acuerdo a la ley 19.638.

Enseguida, el artículo 24 del mismo Decreto, dispone que debe contar en su base de datos con una nómina de las entidades religiosas con personalidad jurídica de derecho público a que se refiere el artículo precedente. Y que tal nómina se formará y mantendrá actualizada mediante la información que periódicamente debe remitirle el Ministerio de Justicia al recurrente.

**Octavo:** Que de las alegaciones formuladas por la recurrente, no se puede derivar que toda la información requerida no se encuentre en su poder o que la forma en que ella se mantiene, no sea alguna de las contempladas en la Ley de Transparencia.



Así, estas alegaciones no se encuadran dentro de alguna de las causales de excepción de la citada norma.

**Noveno:** Que tampoco es posible concordar con la afirmación que esta labor de recopilar, clasificar y resumir parte de la base de datos que mantiene, no sea parte de las funciones propias de ese servicio, dado que no es una solicitud de análisis complejo del poblamiento de algún dato o de investigación de su contenido o de establecer y derivar conclusiones estadísticas sobre ellos.

**Décimo:** Que así, no se vislumbra la concurrencia de alguna causa legal para denegar la información que se ha requerido al recurrente, razón por la que el presente reclamo no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y con arreglo a lo que dispone el artículo 30 de la Ley N° 20.285, **se rechaza**, sin costas, el reclamo deducido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en contra de la decisión de amparo de 12 de noviembre de 2024, Rol C 7846-24, adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, el 12 de noviembre de 2024.

**Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.**

**Redactó el abogado Manuel Luna Abarza.**

**N° Contencioso Administrativo-780-2024**

Pronunciada por la **Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y el Abogado Integrante señor Manuel Luna Abarza.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JMBSXTXDNMN



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JMBSXTXDNMN

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maritza Elena Villadangos F., Jenny Book R. y Abogado Integrante Manuel Domingo Antonio Luna A. Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JMBSXTXDNMN